

ISSN 1819-6543

LEGALIDAD SOCIALISTA 19/2008

Revista de la Fiscalía General de La República de Cuba

TERRORISMO CONTRA CUBA “EL CRIMEN DE BARBADOS”



“Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”. José Martí

LEGALIDAD SOCIALISTA

Año 5, No 19, 4 de Octubre del 2008

Revista electrónica editada por la :

**FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DE CUBA**

CONSEJO DE REDACCION

- Dr. Juan Escalona Reguera
- Msc. Rafael Pino Bécquer
- Msc.Carlos Raúl Concepción Rangel
- Msc.Francisco Javier Fernández Guerra

DIRECTOR EJECUTIVO

- Lic Miguel Angel García Alzugaray

EDICION Y CORRECCION

- Leslie Perera Valdés

DISEÑO

- Licmarie Lima Oña

DIGITALIZACIÓN

- Ana Victoria Revuelta Remedio

-

REDACCIÓN

Amistad 552 e/ Monte y Estrella
Centro Habana, Ciudad de la Habana
CP 10200

TelFax: (537) 867-0795

E-Mail: relaciones@fgr.cu
www.fgr.cu

RNPS 2076

RI: 5702008

SUMARIO

Presentación.....pag. 2

Efemérides:.....pag 3

*LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL
RECONOCIMIENTO COMO DERECHO DE
LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN CUBA..... pag 4*

Eventos. Ciencias Penales 2008....pag 29

Glosario de Términos

Jurídicos..... pag 33

Noticias.....pag 34

Curiosidades..... pag 36

La Revista Legalidad Socialista es una publicación trimestral. Los trabajos que en ella aparecen, expresan la opinión de cada autor, por lo que no constituyen criterios oficiales de la Institución. El Consejo de Redacción se reserva el derecho de exponer sus opiniones mediante notas aclaratorias, así como tiene potestad para realizar los cambios que estime necesario en cuanto a los títulos, estructura, redacción de estilo o extensión de los trabajos presentados por los autores. Los especialistas en asuntos jurídicos o cualesquiera lector que tenga opiniones sobre los temas tratados, así como sugerencias para mejorar esta publicación, puede hacerlo mediante carta dirigida a esta Redacción.

PRESENTACION

Apreciado Lector:

Con el presente número, continuamos la edición periódica en formato digital de la Revista Legalidad Socialista, órgano oficial de prensa de la Fiscalía General de la República de Cuba.

Este medio de divulgación, tiene entre sus objetivos contribuir al desarrollo de la conciencia jurídica ciudadana, mediante la publicación de materiales informativos y de carácter científico, sobre el fortalecimiento de la Legalidad, la lucha contra el delito y la protección de los derechos ciudadanos, labor que es nuestro afán continuar desde las páginas que brindamos a la consideración de nuestros lectores.

Convencidos además de que esta revista puede llegar a constituir un modesto aporte para la superación técnico-profesional y cultural de los juristas y personas interesadas en el desarrollo del Derecho, invitamos a todos los que deseen cooperar en este loable empeño, a enviar a su Redacción los artículos, monografías, ponencias y noticias que puedan coadyuvar a los fines precitados.

CONSEJO DE REDACCION

EFEMÉRIDES

28 de septiembre

Los cubanos celebraron ese día el 48 aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), organización de masa que desde su creación participa de manera activa en la salvaguarda de las conquistas de la Revolución.

Las batallas que libramos y las futuras serían mucho más difíciles si no existiera este ente integrado por más de ocho millones de ciudadanos y que tienen como escenario principal la comunidad, subraya un comunicado del Secretariado Ejecutivo Nacional de los CDR.

El documento divulgado por la fecha recuerda que el artífice de la organización fue el líder de la Revolución, Fidel Castro.

La dirección de los CDR llamó a sus integrantes a mantener en alto valores como la solidaridad, la firmeza, la laboriosidad y el deseo de vencer en el contexto de la recuperación por los daños ocasionados por los huracanes Gustav e Ike.

6 de Octubre

Aniversario 32 del Crimen de Barbados

¡Cuando un pueblo energético y viril llora, la injusticia tiembla!

El 6 de octubre de 1976, a unos minutos de haber despegado del aeropuerto de Barbados, estalló sobre el mar una nave de Cubana de Aviación con 73 personas a bordo (todos los pasajeros y la tripulación). Como demostraron las investigaciones posteriores, no se trataba de un accidente, sino de un sabotaje.

El hecho, que se registra dentro de lo más vil del terrorismo internacional, conmovió profundamente —y aún conmueve— la sensibilidad del pueblo cubano y de toda persona sensata en cualquier parte del mundo.

Desde entonces han transcurrido 32 años en los que el gobierno de Estados Unidos no solo ha levantado un muro de silencio en torno al crimen, sino que actualmente protege y cobija a los responsables de tal masacre, los asesinos Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, quienes andan libres por las calles de Miami porque aún no se ha hecho JUSTICIA.

I, ARTICULOS

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL RECONOCIMIENTO COMO DERECHO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN CUBA.

Esp. Idania Silot Navarro

Fiscal Jefe del Dpto. Asuntos Civiles, Administrativos, Laborales

Fiscalía General de la República

Es la filiación un complejo de relaciones jurídicas entre procreantes y procreados, relación o vínculo que une a la persona con sus dos progenitores o con uno solo.

El estudio y regulación de la filiación ha sido durante siglos tarea muy compleja para las diversas legislaciones. Amplia sigue siendo todavía la discusión que en torno a esta institución se realiza, dadas las diversas formas de enfocar sus distintas facetas, motivado por los cambios que en el orden social, económico, político, etc, se producen en el mundo constantemente.

En el tratamiento del fenómeno de la filiación, existe una tradición jurídica muy antigua que parte de una radical distinción de los hijos en dos grupos diferentes que se forman atendiendo a su origen. La gran distinción se funda en el hecho de que los hijos hayan sido procreados y hayan nacido después del matrimonio de los padres o fuera de este. En el primer caso se habla de filiación legítima y en el segundo de filiación ilegítima. Estos conceptos de legitimidad e ilegitimidad están todavía presentes en las legislaciones de algunos países.

En Cuba, la promulgación del Código de Familia acabó de una vez y para siempre con esta diferenciación y estableció la absoluta igualdad entre los hijos, cualquiera que sea el estado civil de sus padres.

LA FILIACION EN CUBA.

2.1. Algunas reflexiones sobre la filiación en Cuba en la vieja legislación que precedió al Código de Familia.

Al promulgarse el Código de Familia cubano el 14 de febrero de 1975, regía en materia de Derecho de Familia el Código Civil Español de 1888, hecho extensivo a Cuba por Real Decreto del 31 de junio de 1889.

Este Código, que como hemos dicho era la norma sustantiva en la materia, regulaba la filiación separando los hijos legítimos de los ilegítimos y diferenciaba de estos últimos los ilegítimos naturales y no naturales en dependencia de si sus padres al tiempo de la concepción hubieran podido casarse o no.

Desde Roma la legislación se muestra muy severa con los hijos ilegítimos. En efecto, así como en Roma sólo los hijos que provenían de las “*iustae nuptiae*” gozaban de todos los derechos, a la luz de este Código, los hijos legítimos o hijos matrimoniales o los naturales legitimados por subsiguiente matrimonio de sus padres, gozaban de todos los derechos.

Otra era la suerte de los hijos ilegítimos que estaban discriminados, pues no tenían derecho a la tutela legítima aunque sí a la testamentaria, (si eran reconocidos como tales hijos) y también a la dativa con determinados requisitos.

En relación con el derecho a alimentos, se apreciaba también la discriminación, pues los hijos naturales y los legitimados por concesión presidencial, tenían derecho igual que los hijos legítimos a alimentos civiles, que era según el artículo 142, todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la posición social de la familia, y si el alimentista era menor de edad, se incluía dentro de los alimentos su educación e instrucción.

Sin embargo, los hijos ilegítimos no naturales, sólo tenían derecho a recibir en concepto de alimentos, los llamados alimentos naturales, conocidos también como “auxilios necesarios para la subsistencia”, incluidos los gastos indispensables para costear la instrucción elemental y la enseñanza de una profesión, arte u oficio.

No se permitía tampoco a los hijos ilegítimos en quienes no concurriera la condición de naturales, investigar su paternidad por prohibición expresa del artículo 141, de manera tal que solo eran reconocidos si existía voluntad de los padres.

En cuanto a los derechos hereditarios, los hijos ilegítimos naturales y los legitimados por concesión presidencial, aunque eran herederos forzosos, sólo, tenían derecho a la tercera parte de la herencia paterna de no concurrir con ascendientes y descendientes legítimos del causante y si concurrían con estos, a la mitad de la cuota que correspondía a cada uno de los hijos legítimos no mejorados, siempre que fuere dentro del tercio de libre disposición, deducidos los gastos de entierro o funeral.

En la sucesión intestada, sucedían al padre fallecido si faltaban descendientes y ascendientes legítimos y si existían estos, en este ultimo caso sólo tenían derecho a recibir la porción que ya referimos que se les concedía en la herencia testada.

Los hermanos naturales no heredaban a los legítimos y ellos mismos, (los naturales) sólo se heredaban entre sí a falta de ascendientes o descendientes, es decir, el derecho

a suceder en la familia natural solo se circunscribía en general al primer grado en línea directa, con la excepción de que los hijos los trasmitiesen cuando tenían descendencia legítima.

A los hijos ilegítimos no naturales, conocidos en la doctrina como adulterinos, sacrílegos, mánceres y nefarios, clasificación que data del viejo Derecho Romano como ya analizamos, el Código Civil no les otorgó la condición legal de herederos y solo tenían derecho a ser alimentados por sus padres hasta la mayoría de edad si no estaban incapacitados y siempre si habían sido reconocidos por sus padres.

Es necesario referir que la Ley del Registro Civil de 17 de Junio de 1870 que rigió en Cuba desde 1885, siguiendo la misma corriente de discriminación del Código Civil, obligaba a guardar silencio sobre el nombre de la persona con quien se hubiera tenido al hijo y sobre otras circunstancias que permitieran identificarla. Reglaba también en su artículo 15 que al practicar la inscripción del nacimiento se debía expresar de manera clara la calidad de la filiación del inscripto, para que así quedara refrendada indefinidamente su legitimidad o ilegitimidad.

Con la promulgación de una Ley el 15 de Agosto de 1938, se logra una importante modificación sobre la inscripción de los hijos habidos extra matrimonialmente, pues dispuso que se consideraban también hijos legítimos y podían inscribirse como tales a solicitud de sus padres, los hijos habidos fuera del matrimonio cuyos padres estuvieran o no en aptitud para casarse al tiempo de la concepción, siempre que en cualquier tiempo posterior los padres lo hubiesen celebrado legalmente.

La constitución de 1940 que fue restaurada en esencia por la Ley Fundamental dictada por el Gobierno Revolucionario un mes después del triunfo, es decir en el mes de Febrero de 1959, no obstante haber sido la legislación más avanzada sobre la filiación en la historia legislativa de la pseudo república, si bien declaró abolida toda la clasificación sobre la naturaleza de la filiación, equiparó todos los hijos ilegítimos no naturales a los naturales y admitió la investigación de la paternidad, mantuvo no obstante la distinción entre los hijos matrimoniales y no matrimoniales a los efectos de la herencia de sus padres con las mismas diferencias que se establecían en el Código Civil Español.

El artículo 44 de dicha Constitución deja ver claramente esas distinciones al decir:

“Los hijos nacidos fuera del matrimonio, de personas que al tiempo de la concepción estuvieran en aptitud para contraerlo, tienen los mismos deberes y derechos..., salvo lo que se prescribe en cuanto a la herencia. A este efecto tendrán los mismos derechos y deberes los habidos fuera del matrimonio por persona casada cuando ésta lo reconociere o cuando recayere sentencia declarando la filiación. La Ley regulará la investigación de la paternidad.

Queda abolida toda clasificación sobre la naturaleza de la filiación.

No se consignará declaración alguna diferenciando los nacimientos, ni sobre el estado civil de los padres en las actas de inscripción de aquellos, ni en ningún atestado, partida de bautismo o certificación referente a la filiación”.

En resumen, en el tratamiento del fenómeno de la filiación, existía una tradición jurídica muy antigua que partía de una radical distinción de los hijos en dos diferentes grupos, formados atendiendo a su origen, de manera que de acuerdo con ella, la relación jurídica de filiación recibe una mayor o menor carga de derechos. La gran distinción se fundaba en el hecho de que los hijos hubieran sido procreados después del matrimonio de los padres o que se tratase de la situación inversa. En el primer caso se hablaba de filiación legítima y en el segundo de filiación ilegítima en sentido amplio. En la utilización de las ideas de legitimidad y de ilegitimidad había una connotación peyorativa, que trasladaba a los hijos la valoración que se atribuía al acto de procreación (legítimo dentro del matrimonio o ilegítimo fuera). Pero si las cosas se miran con mayor profundidad se advierte que lo que estaba en cuestión no era tanto la reprobación del acto de los padres sino la organización de una serie de medidas de protección del grupo familiar establecido sobre el matrimonio.

2.2 Concepto y Principios de la Filiación en la Legislación vigente

La filiación como ya hemos apuntado, es el vínculo de familia que existe entre el hijo y sus padres, vínculo que crea un complejo de relaciones jurídicas entre procreantes y procreados.

La relación de filiación se establece entre las personas a quienes el derecho coloca en la condición de padres y madres y las que sitúa en la de hijos.

La regulación de filiación que hemos expuesto en el acápite anterior, como es natural no armonizaba con las concepciones y el sistema de valores de nuestra sociedad socialista, en la que se establece como regla básica la igualdad entre los seres humanos y la inadmisibilidad de las discriminaciones de todo tipo y particularmente las que tienen como base un determinado origen familiar.

La Enciclopedia Jurídica Española cuando trata lo referente a los hijos ilegítimos, dice que las corrientes más modernas tienden a favorecerlos y que “quizás algún día resulten equiparados a los legítimos”.

Para nosotros ese día llegó definitivamente el 14 de Febrero de 1975 cuando se promulgó nuestra Ley No 1289, que constituye el Código de Familia, del que no basta decir que equiparó a los hijos, en el sentido gramatical de la palabra, sino que abolió todas las diferencias presentes en la antigua legislación, considerándolos a todos iguales.

Nuestro Código no hace ningún tipo de clasificación de la filiación, sólo reconoce una, la que se consagra y sustenta en el artículo 37 de la Constitución de la República, que proclama el principio de igualdad entre todos los hijos cualquiera que sea el estado civil de sus padres.

Esto significa que acabó definitivamente con las diferencias entre hijos legítimos e ilegítimos “a todos los efectos paterno filiales, parentales y sucesorios.”¹. Ahora no existen diferencias sucesorias, ni tutelares, ni de ninguna otra índole.

El Código de Familia que entró en vigor el 8 de marzo de 1975 como un digno regalo a todas las mujeres cubanas en su día, posibilita a través de los más idóneos medios de prueba la determinación e investigación de la maternidad y de la paternidad, pues el artículo 37 de la Constitución vigente que estipula que el Estado garantiza mediante los procedimientos legales adecuados la determinación y el reconocimiento de la paternidad, se materializa en la práctica, cuando en los procesos de filiación se permite la utilización de diversos medios de prueba incluyendo exámenes biológicos, entre los que se destaca el estudio del ADN.

Como principio constitucional, también se prohíbe consignar en las actas de inscripción de los nacimientos, ni en ningún otro documento que haga referencia a la filiación, declaración que diferencie los nacimientos o que se refiera al estado civil de los padres o la calificación de la filiación del hijo.

Respecto a las presunciones de filiación en el matrimonio, que como se sabe, no juegan en la unión matrimonial no formalizada, el Código acepta igual que el anterior, el tradicional plazo de trescientos días siguientes a la fecha de extinción del vínculo matrimonial, si la madre no se hubiera casado de nuevo y presume también como hijos a los nacidos durante la vida matrimonial.

Esta presunción es “*iuris tantum*”, que significa que puede ser impugnada como analizaremos más adelante al tratar las acciones de filiación.

La posesión continua del estado de hijo en cambio, sólo se da cuando hay unión formalizada y es una situación de hecho que supone la apariencia de

¹ Mesa Castillo Olga. “Regulación Normativa de la Filiación en el Estado Cubano”, Temas de Derecho de Familia, p. 56.

filiación, lo que quiere decir que entre el presunto hijo y la presunta madre o padre existe una situación de hecho que la más común de las personas calificaría de filial. Según la doctrina la integran tres elementos:

- 1- El *nomen*, que significa que el poseedor del estado utiliza habitualmente el apellido de la persona del supuesto padre o madre.
- 2- El *tractatus*, que viene de *tractus* que significa camino. Es la continuada manifestación que tiene la familia de que es hijo; relación que mantienen y se dan recíprocamente dos personas, “es la relación propia de la filiación: un sujeto trata a otro como padre (madre), o éste (ésta) a aquel como hijo.”²

Este se aprecia en la preceptiva del Artículo 75.3 del Código de Familia, cuando reconoce que se presumirá la paternidad, cuando la condición de hijo se haya hecho ostensible por actos del padre o de su familia.

- 3- La fama o reputatio: Es el conocimiento público de la comunidad, la conciencia o conocimiento social que considera a un sujeto padre o madre de otro, o a éste hijo de aquellos(o de alguno de aquellos). Es el reconocimiento social de la relación de filiación, “la vox populi que reconoce al hijo como de un determinado padre”³

Ciertamente, la posesión de estado envuelve una serie de hechos que en conjunto demuestran las relaciones de filiación y de parentesco entre un individuo y su familia, es una actitud firme y expresa, sostenida, continua y pública.

A propósito Puig Peña cita a Demolombe en el sentido de que “la posesión de estado es un reconocimiento público que tiene por testigo la familia, la sociedad entera.”⁴

No podemos obviar al hacer este esbozo general de nuestra regulación jurídica sobre filiación, la intervención del fiscal en todos los procesos que sobre esta cuestión se ventilan en nuestros tribunales. Su legitimación para participar en estos asuntos se la otorga el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, que faculta al fiscal a intervenir como parte (actora o demandada), en los procesos concernientes al estado civil de las personas y en cualquier otro asunto en que alegue un interés social.

² Montés Panadés V. L. Ob. Cit. P. 365.

³ Díez Picasso Luis y Guillón Ballesteros. Ob. Cit. P. 252.

⁴ Puig Peña Federico. Tratado de Derecho Civil Español, p. 44.

Y es que la determinación de la filiación no sólo afecta a la persona y su familia, pues por tratarse de procesos en los que se dilucidan cuestiones referentes a la condición y el estado de las personas, entraña un interés público y superior, por ello interesa también al Estado, a quien el fiscal representa por mandato de la Constitución y de la Ley 83 de 1997, Ley de la Fiscalía General de la República.

Podemos resumir algunos efectos básicos de la filiación que contempla el Código de Familia diciendo que con ella se generan:

- Los derechos derivados de la patria potestad cuando se trata de menores de edad, los que son amplísimos y entre los que se encuentran los de recibir guarda y cuidado, alimentación, vestido, habitación, la atención de la salud, correcta educación y desarrollo y cuidado y protección de sus bienes entre otros.
- El derecho a los alimentos, que aunque está incluido en los deberes de los padres respecto a los menores hijos bajo su patria potestad, se concreta más en el artículo 122 que posibilita a los hijos menores reclamar alimentos a sus padres en todo caso. El artículo 123 por su parte fija la obligación recíproca de darse alimentos para los ascendientes y descendientes.
- Los derechos sucesorios, pues cuando el Código Civil al normar en su libro cuarto el Derecho de Sucesión, considera a los hijos y a los ascendientes como herederos especialmente protegidos cuando no estén aptos para trabajar y dependan económicamente del causante, y si se les olvida en el testamento, éste se anula en cuanto a la institución de herederos.
En la herencia intestada, los hijos son los primeros en ser llamados, heredan por derecho propio y entre ellos la herencia se divide a partes iguales.
- El derecho a la tutela si se es mayor de edad y se carece de capacidad declarada judicialmente, pues los padres están en el segundo orden de prelación después del cónyuge. A su vez, los hijos deben asumir la de sus padres de ser necesario.
- El derecho a los apellidos. El artículo 45 de la Ley del Registro del Estado Civil contempla que corresponderá como primer apellido el primero del padre, como segundo el primero de la madre.

2.3 Las acciones de filiación. Generalidades.

Acción de filiación “es la posibilidad que tienen los interesados en la filiación, de promover la averiguación de la verdadera, para que conste legalmente, y de promover el ataque a la que conste legalmente, cuando no sea la verdadera.”⁵

En efecto, las acciones de filiación constituyen un poder, una facultad que la ley franquea a las personas para que puedan reclamar o impugnar el vínculo padre e hijo.

Como regla general las leyes reconocen dos tipos de acciones de filiación:

- La de reclamación o acción para reclamar una filiación.

⁵ Albadalejo Manuel. “Curso de Derecho Civil”, p. 249.

➤ La de impugnación, destinada a impugnar una determinada.

Algunas añaden otras conocidas como:

- La declarativa o de declaración de la filiación, la cual persigue obtener la declaración de que una concreta situación se corresponde o no con los títulos de legitimación que la manifiestan.
- La acción mixta, en la que se acumulan la de reclamación e impugnación. De ella se dice que no es en realidad un tipo de acción de filiación distinta a las mencionadas, sino el ejercicio conjunto o acumulado de ambas, que resulta necesario si se reclama una filiación ya determinada, pues como es lógico, se debe realizar de manera previa o coetánea la impugnación de la establecida.

“Si lo que se pretende es declarar la realidad de una filiación, se trata de una acción declarativa, si se pretende determinarla, la acción es de reclamación y si por el contrario, lo que se pretende es destruir una filiación ya determinada, la acción es de impugnación.”⁶

Coincidimos con el profesor español Montés, en que las acciones de investigación de la paternidad y de la maternidad, no deben considerarse acciones de filiación en sentido estricto, pues generalmente estos actos constituyen acciones previas o simultáneas a algunas de las acciones de filiación referidas. Tampoco las acciones encaminadas a lograr la rectificación de alguno de los datos de la inscripción, pues no se dirigen a reclamar o impugnar filiación alguna.

Las acciones de filiación presentan un específico *intuitus personae* en relación con el actor y son por ello personales, suyas; de tal manera que no es posible que la acción sea ejercitada por personas distintas del titular, cualesquiera que sean los vínculos que le unen con éste.

Nuestro Código de Familia y la Ley 51 de 15 de julio de 1985, Ley del Registro del Estado Civil, precisan en sus normas quienes están legitimados para el ejercicio de las acciones de filiación, cuestión que veremos claramente al referirnos más adelante a cada una de ellas. Lo que sí es regla es que las acciones de filiación corresponden al legitimado para interponerlas.

2.4. Las acciones de filiación en la legislación cubana actual.

Si repasamos nuestro Código de Familia y la Ley del Registro del Estado Civil, apreciamos que se reconocen cuatro acciones de filiación:

- La acción de imputación,
- La acción de reclamación,
- La acción de impugnación,
- La de impugnación y reclamación.

⁶ Montés Panadés V.L. Ob. Cit. P. 410.

2.4.1. La acción de imputación

Se produce cuando el progenitor que acude a inscribir al hijo declara el nombre del otro, de conformidad con la facultad que la ley le concede.

Como en nuestro país casi todos los nacimientos se producen en centros asistenciales de salud y al egreso de la madre el niño debe haber quedado inscripto, tal y como está concebido en el procedimiento que fija la Ley de Registro de Estado Civil, como regla general, es la madre soltera o lo que es lo mismo, la madre que no tiene vínculo matrimonial formalizado ni judicialmente reconocido, la que realiza la acción de imputación.

Más adelante profundizaremos en esta cuestión, cuando nos detengamos en la práctica del procedimiento de inscripción y reconocimiento de los hijos.

2.4.2. La acción de impugnación

Se aprecia en nuestro ordenamiento jurídico, no sólo cuando existiendo matrimonio formalizado, el hijo es inscripto por la declaración de uno solo de los padres que surte efectos respecto a ambos y luego el padre que no acudió a ese acto, impugna esa inscripción dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de ella. Puede ejercitarla también el propio inscripto dentro del año siguiente a la fecha en que arribe a la mayoría de edad.

Cuando la madre generalmente, aunque puede ser el padre como vimos antes, realiza la acción de imputación al declarar el nombre y los apellidos del otro progenitor y este último informado por el registrador niega la paternidad, es indudable que aquí se ha producido una impugnación extrajudicial; como sostiene la Dra. Olga Mesa, una “impugnación a escala registral”.

Nótese que la Ley del Registro de Estado Civil al referirse a esta cuestión en los artículos 48, 49 y 51, utiliza indistintamente las frases, “negada la paternidad” e “impugnada la paternidad”. Dice el último párrafo del artículo 48: “**Negada** la paternidad dentro del término del apercibimiento, se procederá a practicar la inscripción sin consignar el nombre y los apellidos del padre que la haya **impugnado**”.

En este caso, el niño o niña se inscribe con los dos apellidos de la madre o repetido el único que esta tenga.

Vale significar que en el segundo párrafo del artículo 48, se emplea dos veces el vocablo impugnación para referirse a dos posibilidades distintas; la primera relacionada con el acto de negar la paternidad ante el registrador y la otra referida a la impugnación judicial que puede realizar aquel de los padres que no haya comparecido

al acto del reconocimiento y que por el hecho del matrimonio, le fue atribuida. Dice este precepto: “Transcurrido dicho término sin que se verifique la impugnación, se formalizará la inscripción de conformidad con el apercibimiento y una vez efectuada la inscripción, la impugnación sólo podrá hacerse mediante el proceso judicial que corresponda dentro del término de un año de practicada dicha inscripción.

Esta reiteración de la palabra impugnación puede motivar confusiones al interpretar esta norma, por lo que considero que debiera sustituirse la primera por otro sinónimo que indique la falta de aceptación extrajudicial, dejando el término impugnación para cuando se refiere al ejercicio de la acción ante el órgano jurisdiccional.

De este mismo artículo 48 (segundo párrafo) se deduce que también los padres no casados, pueden ejercitar la acción de impugnación dentro del año siguiente a la práctica de la inscripción y merece apuntar que se limita a decir que podrá hacerse mediante el proceso que corresponda sin precisar en cuáles razones puede sustentarse esa inconformidad, como lo aclara al normar la cuestión entre padres casados.

El Código de Familia no tiene normas para la impugnación de la filiación por vicios de la voluntad, por lo que ha de estarse a las reglas generales de anulabilidad y a los términos de prescripción que regula el Código Civil que en este caso es de un año.

Sería prudente a mi juicio, que se definiera al menos qué debe entenderse por error a estos fines, pues no con poca frecuencia se plantean casos de impugnación de la filiación, aduciendo como motivo este vicio del consentimiento, sin embargo la manera en que éste se define en el Código Civil, no alcanza casi nunca, la problemática que se plantea.

2.4.3. La acción de reclamación.

Pretende un pronunciamiento judicial, que determine la filiación de una persona que con anterioridad no ostentaba.

Es la que puede ejercitar el padre o la madre según el caso, que haya reconocido al hijo e imputado la paternidad al otro, si este la impugnara ante el registrador o lo que es lo mismo, si no la reconociera o la hubiese negado.

También el padre que así obrase, podrá posteriormente reclamar la filiación en la forma que establece la ley si no se prestara el consentimiento del otro progenitor, pues si lo ofrece se inscribirá al hijo con los apellidos de ambos y sólo se requerirá el consentimiento del hijo, si fuera mayor de edad. El hijo igualmente, al ser mayor de edad, puede ejercitar la acción de reclamación.

Al carácter personalísimo de este tipo de acción el Tribunal Supremo Popular se refirió en su sentencia No.35 de 4 de abril de 1981 al expresar: “(...) Que el motivo único establecido al amparo del inciso primero del artículo 630 de la Ley de

Procedimiento Civil Administrativo y Laboral por el que se alega infringido el artículo 77 del Código de Familia, es improcedente, porque para reclamar el reconocimiento de la condición de hijo, la acción a ejecutar está concedida al padre o madre que ya lo hubiera reconocido con respecto al que aún no lo haya hecho o al propio hijo, y si en el caso, la actora, ahora recurrente, acompañó a las actuaciones la certificación acreditativa de su nacimiento, de la que además constan los datos correspondientes a su filiación, no le era dable el ejercicio de la acción interesando el reconocimiento de la condición de hija de la que fuera su progenitora, en relación con sus presuntos padres, abuelos de la recurrente, ya que cuando el hijo insta a los expresados efectos, su acción sólo puede comprender y referirse a su situación personal (...)”.

2.4.4. La acción de impugnación y reclamación

Esta acción mixta la encontramos en el texto del artículo 81 del Código de Familia, que consagra la posibilidad de cualquier persona que se considere con derecho a inscribir como suyo al hijo reconocido antes por otra persona, porque se considere su verdadero progenitor, de hacerlo en cualquier tiempo.

No obstante, la expresión “en cualquier tiempo” ha traído no poca polémica, pues el artículo 80 declara que el hijo reconocido durante su minoría de edad, sólo podrá impugnar el reconocimiento dentro del año siguiente a la fecha en que arribe a su mayoría de edad y como el último párrafo del artículo 81 dice que si fuera mayor de edad la persona cuya filiación se cuestiona, es indispensable para que el proceso se desarrolle, que la acción se ejercite conjuntamente por quien se considere el verdadero progenitor y por el hijo cuyo reconocimiento se pretenda, entonces queda en entredicho la expresión “en cualquier tiempo” del párrafo primero del mentado precepto 81, toda vez que en realidad para el ejercicio de la acción conjunta de impugnación y reclamación de una persona mayor de edad, sólo se dispone de un año a partir del cumplimiento por el hijo de los dieciocho años de edad y no de todo el tiempo.

Al respecto el Tribunal Supremo Popular dijo en su sentencia No. 631 de 31 de julio de 1996 al resolver un recurso de casación sobre esta cuestión:

“Que lo previsto en el último párrafo del artículo 81 del Código de Familia no puede interpretarse aisladamente a lo preceptuado en el artículo 80 del propio cuerpo legal, habida cuenta que el hecho de que resulte obligado para quien se considere con derecho a reconocer a un hijo inscripto por otro, cuando este fuere mayor de edad, a efectuar la acción de impugnación de conjunto con el mismo, en modo alguno puede ser excluyente del plazo de caducidad que expresamente determina el citado artículo 80, pues esta interpretación conllevaría ofrecer mayor garantía a un presunto padre, hasta ése momento desconocido, que al propio hijo afectado, de entenderse que en cualquier tiempo podrá establecer la acción, y es por ello que sabiamente, el legislador en estos casos obligó a su ejercicio de conjunto, ya que al encontrarse el hijo reconocido durante su minoría

de edad obligado a impugnar ese reconocimiento dentro del año siguiente a la fecha en que arribó a su mayoría de edad, tácitamente se exige al otro actor a cumplir también ese plazo; que en el caso cuestionado se ejerció la acción cuando la hija, cuyo reconocimiento se pretende, contaba con 34 años de edad, por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 125 y 126, ambos del Código Civil fuerza declarar de oficio la caducidad del reclamado derecho por ambos pretendidos y en consecuencia se desestima íntegram el recurso de casación interpuesto...”.

Si se tratara de un menor de edad, se le dará traslado al fiscal para que emita sus consideraciones acerca de si conviene a los intereses del menor, la substanciación o no del proceso antes de que arribe a la mayoría de edad.

Es de significar que cada vez más los dictámenes de la Fiscalía en estos asuntos, están sustentados en comprobaciones e investigaciones previas, que le permiten al fiscal llegar a conclusiones acerca de lo que resulta más beneficioso a los intereses de los menores de edad y así poder ofrecer con razonamientos lógicos, a veces después de haber consultado otros especialistas, un criterio profundo, carente de esquematismos y formalidades.

Si el tribunal decidiera, dado el carácter previo que tiene este trámite, archivar las actuaciones, los interesados sólo podrán plantear el asunto nuevamente de la manera descrita antes, es decir, cuando el menor arribe a la mayoría de edad.

Nada refieren las leyes analizadas respecto a si a la muerte del legitimado, las acciones de filiación pasan a sus herederos.

Tratándose de acciones que sólo corresponden al legitimado para interponerlas como antes vimos, considero que una vez entablada la acción, si muere el actor, sus herederos pueden continuar en el ejercicio de ella. Pero también pienso que esto debe dejarse dicho claramente en la norma.

EL RECONOCIMIENTO DE LOS HIJOS

3.1. Concepto.

El reconocimiento es una declaración en la que quien la hace manifiesta su paternidad o maternidad. “es un acto por virtud del cual el que lo realiza se declara padre o madre del hijo de que se trata”.⁷

Es un deber de los padres que puede materializarse con la inscripción en el Registro de Estado Civil, siendo por tanto sus elementos personales:

⁷ Albadalejo Manuel, Ob. Cit, p. 229

- El padre,
- La madre,
- Ambos conjuntamente y
- El hijo.

El artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño dice que: “El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre (...)”.

En la doctrina se reconocen dos grandes tipos de reconocimiento:

- El reconocimiento voluntario, que es la declaración que realizan los dos padres conjuntamente o por separado, mediante la cual acreditan que son los progenitores de la persona de que se trata y se puede dar lo mismo en el matrimonio formalizado que si no existe este.
- El reconocimiento forzoso, que tiene lugar cuando se realiza a petición del hijo o de uno de los padres en los casos determinados por la ley ante el órgano jurisdiccional competente.

No compartimos la idea de hablar de reconocimiento forzoso, toda vez que el reconocimiento es una manifestación de voluntad, un acto libre y voluntario, pues sólo lo hace quien quiere, aunque si lo omite, pueda declararse judicialmente la filiación.

Entonces lo que se denomina reconocimiento forzoso, no es un verdadero reconocimiento, que debe entenderse como ya expresamos como un acto voluntario, sino un pronunciamiento judicial por virtud del cual se declara la filiación, a veces con la oposición del enjuiciado.

Se discute en la doctrina si el reconocimiento es un negocio jurídico o una declaración de ciencia. “Parece claro - dice Montés- que se trata de una declaración de voluntad, pero no negocial, si se entiende que el negocio jurídico se caracteriza esencialmente por la llamada voluntad de los efectos. El efecto producido por el reconocimiento, deriva directamente de la ley y no está en la autonomía del sujeto modalizar de alguna manera tal efecto. El reconocimiento por tanto, es un acto jurídico en el que la voluntariedad del sujeto se exige solamente en la realización del mismo, pero no se proyecta respecto de los efectos que de tal acto se deriven. Son efectos legales, no efectos negociales o voluntarios”.⁸

“En el reconocimiento, el reconocedor da a conocer su paternidad biológica y el Derecho, que presume exacta su afirmación, edifica sobre ella la paternidad jurídica, sin que sea necesaria la manifestación del padre de investirse de ésta”⁹

⁸ Montés Panadés. Ob. Cit., p.387.

⁹ Alvadalejo Manuel. Ob. Cit., P. 230.

Considero igual que estos eminentes profesores, que el reconocimiento de los hijos es un acto jurídico voluntario que no puede confundirse con un negocio jurídico, en razón de que una vez realizado, sus efectos dimanar de la norma legal y no pueden acomodarse a capricho de los interesados.

3.2. El reconocimiento en nuestra legislación y práctica.

En nuestro Código de Familia, que tiene entre sus objetivos el más eficaz cumplimiento por los padres de sus obligaciones con respecto a la protección, formación moral y educación de los hijos, para lograr su desarrollo pleno e integral como dignos ciudadanos de la sociedad socialista, las relaciones entre padres e hijos exigen en primer orden la determinación de la paternidad.

El Código modificó sustancialmente y sustrajo de sus preceptos la vieja concepción que todavía prima en las legislaciones de muchos países latinoamericanos e incluso de Europa, que obligan a ocultar la identificación del otro padre cuando el reconocimiento lo realiza uno de manera separada del otro.

La Ley 51, Ley del Registro del Estado Civil del 15 de Julio de 1985, derogó expresamente los artículos del 66 al 73 del Código de Familia que regulaban el procedimiento para la inscripción del nacimiento del hijo habido dentro o fuera del matrimonio. A partir de entonces ese procedimiento lo encontramos en esa Ley y su Reglamento.

Ella deja sentado en el artículo 45 que la filiación de los hijos sólo se probará con la certificación de la inscripción de su nacimiento, expedida con las formalidades establecidas.

No es igual el procedimiento para el reconocimiento de los hijos si los padres están casados o han reconocido judicialmente el matrimonio que si se trata de una unión que no está formalizada ni ha sido reconocida por el órgano jurisdiccional.

En el primer caso, es decir si existe matrimonio formalizado o reconocido por el tribunal, la inscripción o el reconocimiento efectuado por uno solo de los padres surtirá efectos legales con respecto a ambos.

No obstante, el artículo 78 del Código de Familia prevé la posibilidad de que la inscripción hecha de ésta manera pueda ser impugnada por el cónyuge que no hubiera concurrido al acto, pero en este caso, la impugnación sólo podrá fundarse en la imposibilidad de los cónyuges para haber procreado al hijo; esto es igual a imposibilidad material por falta de relación entre la pareja.

El Código no es explícito y esa expresión: “imposibilidad de los cónyuges para haber procreado el hijo” se puede interpretar de varias formas, pero su alcance se precisó por el Tribunal Supremo Popular en la sentencia No. 20 de 30 de diciembre de 1976 y la No. 6 del 31 de Mayo de 1976 de la siguiente manera:

“Con relación al artículo 78 del propio Código (se refiere al de familia), si bien su regulación se contrae a la posibilidad de impugnar la inscripción del nacimiento del hijo practicada conforme al artículo 66 (antes de ser derogado por la Ley del Registro del Estado Civil en la que se reprodujo casi textualmente el artículo 45), tal y como acontece en el caso de autos, sin embargo esta impugnación sólo podrá fundarse en la imposibilidad de los cónyuges para procrear, imposibilidad referida al aspecto físico”.

“Conforme al artículo 74 en relación con el 78 ambos del Código de Familia, sólo es prueba útil la imposibilidad de los cónyuges para haber procreado descendencia (...)”.

La acción de impugnación en estos casos sólo puede ejercitarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que el afectado hubiere tenido conocimiento de la inscripción.

Ahora bien, el reconocimiento del hijo de padres no unidos en matrimonio formalizado o reconocido judicialmente, lo deben hacer ambos conjuntamente o de manera individual o separada.

Si la declaración de la solicitud de inscripción del nacimiento la hiciera sólo la madre y esta declarara el nombre del padre como es su facultad, se citará a este último para que comparezca ante el registrador, apercibido de que si no concurre dentro del plazo de 90 días a aceptar o negar la paternidad, se inscribirá al hijo como suyo.

Este procedimiento se sigue también con respecto a la madre si fuera el padre quien hiciera la declaración.

La ley no especifica de qué término dispone el registrador para notificar al padre la citación, pues sólo hace alusión al que se le otorga a este último para que concurra al Registro a aceptar o negar la paternidad. Tampoco es específica en cuanto al plazo con que cuenta este funcionario para notificar a la madre, cuando en virtud del artículo 53 de la Ley y del 80 del Reglamento, es preciso informarle que con los datos que aportó, ha sido imposible localizar y citar al padre y concederle 30 días para que ofrezca los datos correctos que permitan encontrarlo.

Si embargo, por la forma en que se redacta el último párrafo del artículo 83 del Reglamento de la Ley del Registro del Estado Civil que consigna: “si con estos datos no fuere posible dentro de un nuevo término de treinta días hábiles, hallar y citar personalmente al padre, se le notificará así a la madre, participándole que se practicará la inscripción sin consignar la paternidad”, parece que el legislador quiso aclarar que

el lapso con que cuenta el registrador para proceder a la notificación de la citación al padre es de 30 días hábiles.

Si transcurren los noventa días y el padre o la madre debidamente citado no se presenta, se formaliza la inscripción en los términos del apercibimiento, es decir con los apellidos del imputado y este dispone de un año a partir de practicado el asiento registral para impugnarlo mediante el proceso judicial que corresponda.

Aunque la ley no hace, como a mi juicio debiera, ninguna observación respecto a los motivos en que se puede fundar esta impugnación, considero que ella deberá sustentarse, al igual que en el caso del matrimonio formalizado, en la imposibilidad física para la procreación. También pudiera alegarse alguno de los vicios del consentimiento como la amenaza.

Continuando con el estudio legislativo nos encontramos con que nada aparece regulado respecto al proceder que debe seguirse cuando el padre que tiene que ser llamado es extranjero o un cubano residente temporal o permanentemente en fuera del país o está cumpliendo alguna misión oficial o internacionalista en el exterior. Esto es muy importante porque en nuestra realidad social son frecuentes casos de esta naturaleza y nos encontramos con un silencio de la ley, pues el artículo 30 de la Ley del Registro del Estado Civil, sólo refiere que en las oficinas consulares de Cuba, se inscribirán los hechos y actos relacionados con el estado civil de cubanos e hijos de cubanos en el extranjero, es decir, todo indica que se refiere a los hechos jurídicos de esta clase que se produzcan allá, pero si se entendiera aplicable también a los casos de inscripción de hijos que nacen en Cuba y es el papá el que está en el extranjero, de todos modos existe un vacío, pues no está regulado el procedimiento que debe seguirse para lograr su citación y apercibimiento.

Lo que se hace cotidianamente es que la madre realiza la inscripción sin hacer alusión a la filiación paterna y posteriormente el padre puede hacer el reconocimiento en el Registro del Estado civil correspondiente.

Como es natural esto tiene no pocos inconvenientes; uno de ellos pudiera ser el hecho de que falleciera el progenitor que está fuera del país sin haber practicado la inscripción lo que obligaría a la madre al engorroso proceso de reclamación de la filiación. De hecho entrevistamos compañeras cuyos hijos tienen una sola filiación reconocida, por encontrarse sus padres en el exterior de manera temporal o definitiva.

Al respecto tuvimos la oportunidad de estudiar una comunicación de la Dirección Nacional de Registros y Notarías del Ministerio de Justicia fechada el 5 de octubre de 1990, que sabiamente ofrece una solución para los casos en que el padre se encuentra cumpliendo una misión internacionalista y no puede asistir al acto de inscripción del nacimiento de su hijo, disponiendo que los registradores al recepcionar esos casos, deben enviar al Comité Militar los nombres para su localización en la

Unidad Militar a la que pertenece y de esta forma dar cumplimiento al artículo 30 de la Ley del Registro del Estado Civil, que se refiere al auxilio que deben prestar al registrador para el desempeño de sus funciones, los dirigentes y funcionarios de los órganos y organismos del Estado.

Explica esa correspondencia que los padres podrán declarar si aceptan o niegan la paternidad ante el jefe de la Unidad Militar, firmando ambos la declaración y enviándola al Comité Militar para que la traslade al Registro que corresponda y de esta forma los registradores cumplimentar el artículo 48 y que si no pudiera localizarse al padre, deberá inscribirse al menor con los apellidos maternos, teniendo posteriormente derecho el padre a efectuar el reconocimiento de su hijo en cualquier tiempo.

Pero como se entiende claramente, sólo se refiere a las misiones internacionalistas de carácter militar y en consecuencia ese procedimiento, aunque muy válido, no es aplicable en otras de carácter civil que son muy frecuentes en estos tiempos.

Consideramos que debe regularse en la norma alguna solución para este problema que es real y no entendemos prudente que sea aguardar por el regreso del padre, lo que puede demorar demasiado o no suceder.

La norma permite igualmente, que la aceptación o negativa a que hemos hecho referencia pueda hacerse en documento público, si el progenitor citado se encuentra impedido por justa causa de comparecer ante el registrador, pero si la impugna en término (90 días a partir de la citación) y el documento en que ella conste llega al Registro con posterioridad al vencimiento de ese plazo, la inscripción sólo se puede modificar mediante ejecutoria del tribunal después del proceso correspondiente.

Apreciamos aquí que tampoco es precisa la ley en cuanto a lo que debe entenderse por justa causa a los fines de admitir la aceptación o negativa de la filiación a través de un documento público, pues sólo en esos casos es permitido no acudir personalmente ante el registrador y como son muchas las razones que pudieran argüirse, y ello pudiera dar lugar a falta de uniformidad en la interpretación de ese precepto, opino que debieran precisarse esas razones por justa causa.

La norma posibilita al progenitor que habiendo sido citado impugna la paternidad, a reconocerla con posterioridad si así lo desea, pero para que ese reconocimiento pueda asentarse en los libros del Registro, es necesario el consentimiento del que inscribió al hijo o del que lo represente legalmente, y si no lo otorga, el interesado podrá reclamar la paternidad mediante el proceso correspondiente que indistintamente los operadores del derecho denominan de reclamación de filiación o de paternidad. Este proceso, según nuestra Ley de Procedimiento Civil Administrativo y Laboral, se ventila por los trámites del Procedimiento Ordinario ante la sección de lo civil del Tribunal Municipal que corresponda.

También puede establecer la acción de reclamación de la filiación, el padre o la madre no unido por vínculo matrimonial, que haya reconocido al hijo, ejercitándola contra el otro progenitor a quien se le imputó la filiación y hubo de negarla a nivel registral.

Ahora bien, como hemos explicado hasta aquí, es facultad de los padres no unidos en matrimonio formalizado o reconocido judicialmente, al hacer la declaración para la inscripción del nacimiento del hijo común, referir el nombre y apellidos del otro así como los datos que permitan localizarlo y citarlo personalmente.

Dice la Ley* que si no lo hace, éste último podrá reconocer posteriormente la paternidad, pero requerirá para su asiento en el Registro, el consentimiento del que haya inscripto al hijo o del que lo represente legalmente y si no lo prestara, se podrá reclamar la paternidad en la forma que establece la ley, haciendo alusión al proceso ordinario a que ya nos referimos.

Es preciso advertir sobre una contradicción que apreciamos en este artículo 52 en relación con lo que dispone el artículo 77 del Código de Familia, que dice textualmente: “La acción para reclamar el reconocimiento de los hijos corresponde a éstos y al padre o madre que ya los haya reconocido con respecto al que aún no lo haya hecho”.

Según el claro texto de este precepto sustantivo, tienen legitimación activa para pedir el reconocimiento, sólo el hijo y el progenitor que ya lo hubiese reconocido, sin embargo, la norma procesal otorga esa facultad también al otro progenitor, lo que me parece justo, pues de otro modo éste último estaría a merced de la voluntad del otro que hasta caprichosamente o por intereses personales ajenos totalmente a los principios que inspiran el Derecho de Familia en nuestra sociedad socialista, pudiera oponerse rotundamente a ese acto que en resumidas cuentas es un derecho de los niños y las niñas, contar con la filiación tanto paterna como materna.

Pero para evitar interpretaciones erróneas que pudieran conllevar a la vulneración del principio de igualdad que refrenda la Constitución de la República y el propio Código de Familia, sería más prudente rectificar ese precepto de la Ley de Familia en los términos analizados.

Parece que es esa la línea que debe seguirse, pues en el proyecto del Código de Familia de 1996 no aparece redactada la cuestión de la legitimación en aquellos términos categóricos.

Otra cuestión que a mi juicio debiera considerarse en la modificación de que está urgido el Código de Familia, es la de conceder acción al fiscal para reclamar el reconocimiento de la filiación ya sea materna o paterna de los menores de edad, si no

* Artículo 52 de la Ley 51. Ley del Registro del Estado Civil.

lo hiciera o no pudiera hacerlo su representante legal o si no lo tuvieran, como puede ser por ejemplo el caso del niño o la niña cuya madre fallece al dar a luz.

Si la biparentalidad es un derecho que se reconoce a todos los infantes, debe la ley posibilitar que cuando los obligados no ejerciten o reclamen ese derecho o no puedan hacerlo por cualquier razón, pueda otra persona en función de los intereses de aquellos, ejercitar las acciones que correspondan para lograrlo y nadie mejor que el fiscal, a quien por demás le corresponde legalmente su representación o defensa cuando no tienen representante legal o si los intereses de ambos son contrapuestos.

El último párrafo del artículo 40 de la Ley del Registro del Estado Civil obliga a la exhibición del documento oficial de identidad del o los declarantes para practicar la inscripción y no hace ninguna excepción.

Como esto ha traído no pocos problemas como analizaremos más adelante, pienso que debieran hacerse en este precepto las mismas salvedades del el artículo 60 del Reglamento, cuando al referirse a la necesidad de mostrar ese documento para que el registrador obtenga los datos que debe consignar en los documentos registrales, exceptúa los casos en que al momento de autorizar el acto y por circunstancias excepcionales, no pueda exhibir dicho documento o cuando la postergación del acto registral pudiera causar perjuicios irreparables a los interesados.

Sabidamente la norma salva la falta de ese documento con la presencia de dos testigos de conocimiento.

Pudiera entenderse aplicable el mencionado artículo 60 a los casos de inscripción del nacimiento, considerando que es un precepto general para todos los comparecientes, pero seguiría el obstáculo cuando el trámite se practica en la unidad del sistema de salud donde ocurre el nacimiento, ante el director o la persona designada por el, pues el mentado artículo 60 se refiere clara y exclusivamente al registrador cuando va a consignar los datos en los documentos registrales.

Lo ideal entonces sería que se señalaran las excepciones del tantas veces citado artículo 60 del Reglamento de la Ley registral, también al final del artículo 40 de la Ley del Registro del Estado Civil.

Es indudable que para un acto de tanta trascendencia para las personas y para la sociedad como es la inscripción del nacimiento, de cuyo acto se derivan otros actos y derechos, sobre todo en una sociedad organizada como la nuestra, no debe llegarse al extremo de condicionarlo a la exhibición del documento de identificación oficial de los padres si ello puede lograrse por otros medios como pueden ser los testigos, y no es menos cierto también que tal exigencia puede ocasionar perjuicios irreparables a los interesados. Debemos señalar sin embargo, que los compañeros de salud pública le conceden una elevada importancia a esta exigencia de la Ley, porque ello le permite

determinar con exactitud y facilidad la responsabilidad administrativa en caso de fallecimientos maternos o de los niños, al poder precisar, según la dirección oficial de la madre, no solo el municipio, sino hasta el Policlínico responsable de su atención.

Por último quiero detenerme en el artículo 40 de la Ley del Registro, que establece que el registrador del estado civil practicará la inscripción del nacimiento de conformidad con:

- **La declaración de la madre o del padre conjuntamente o la de uno de ellos, ante el director del hospital donde ocurra el nacimiento o de la persona que el designe.**
- **La declaración se hará ante el registrador si el parto no tuviera lugar en un hospital.**
- **Los documentos autorizados por los capitanes de naves o aeronaves cubanas respecto a los nacimientos que en ellos ocurran, por los jefes militares facultados en situación de guerra o agresión militar contra el país y por los funcionarios consulares o diplomáticos sobre los hechos y actos relacionados con el nacimiento de cubanos en el extranjero.**
 - **La declaración del interesado si fuera mayor de edad.**
 - **Los documentos en que constan las inscripciones practicadas en las extinguidas alcaldías de barrio a instancia de parte, y**
 - **Ejecutoria del tribunal competente.**

Sin embargo, aunque como puede apreciarse esta ley no prevé la posibilidad de que la declaración para la inscripción o reconocimiento de la filiación pueda realizarse ante notario, salvo en el caso de que uno de los padres haya sido citado para que acuda ante el registrador a aceptar o negar la filiación que le imputa el otro y estando impedido de hacerlo por justa causa exprese esa aceptación o negativa mediante documento público y tampoco el Código de Familia se refiere a ello, en la práctica los notarios realizan escrituras de reconocimiento de hijo, sobre todo cuando el padre que quiere reconocer es un extranjero y a partir de ella, el registrador practica la inscripción.

Todo indica que la posibilidad que se ofrece al progenitor no casado, impedido de asistir al registro a aceptar o negar la paternidad, se ha hecho extensiva por practica jurídica a los demás.

Al respecto consultamos el Dictamen No. 3 de 5 de abril de 1997 de la Dirección Nacional de Registros y Notarías del Ministerio de Justicia, que respondiendo a una consulta de si es posible dejar mediante nota marginal en el acta de inscripción de nacimiento de una persona, el reconocimiento que hiciera como hijo suyo otra mediante un testamento abierto, se le responde que “surte efectos legales todo reconocimiento contenido en documento público.”

Me parece entonces que lo más prudente es atemperar la ley a la realidad y en consecuencia incluir en la norma la posibilidad de

reconocimiento voluntario de la filiación en escritura pública, tal y como está previsto en el Proyecto de Código de Familia publicado en 1996, que no solo regula esta forma de reconocer la filiación, sino además, por declaración personal de los padres ante el Registro del Estado Civil y en documento privado, sin perjuicio de su posterior reconocimiento judicial.

Un detalle que advertimos cuando revisamos estas escrituras es que no se dice nada en ellas sobre la capacidad legal del reconocente, lo cual es forzoso en atención al artículo 67 del Reglamento de la Ley del Registro del Estado Civil que indica: “ La capacidad legal de los extranjeros se regirá por su ley personal acreditada mediante documento idóneo, excepto que en la ley, convenios o tratados se disponga otra cosa.” Se nos confirmó por los notarios que no se exige en la práctica, para el reconocimiento de hijos, este documento y sí en todos los casos de formalización de matrimonio.

3.2.1. La capacidad para reconocer.

Nada dice nuestra legislación de familia ni la registral sobre la capacidad que se exige para reconocer. No obstante, en el artículo 61 del Reglamento de la Ley del Registro del Estado Civil reza que “son incapaces para comparecer en los actos que autoriza el registrador, los menores de 18 años de edad excepto en los casos que la Ley lo autorice, los incapacitados judicialmente para el acto de que se trate y los que la ley determine en relación con un acto en particular.”

Más adelante, el artículo 64 dice que en los casos en que la ley no exija edad determinada para comparecer en el acto de que se trate, el registrador se limitará a consignar que el compareciente es mayor de edad.

Debemos entender entonces que según estas reglas, los jóvenes menores de 18 años que hayan procreado fuera del matrimonio, del que como se sabe, sólo cabe hablar cuando se ha formalizado o reconocido por el órgano jurisdiccional, no tienen capacidad para reconocer a su descendencia, tampoco la tienen para reclamar o impugnar la filiación; decimos fuera del matrimonio porque el Código Civil reconoce plena capacidad a los menores de 18 años que hayan formalizado matrimonio.

En la práctica del Registro del Estado Civil de esta provincia, los menores de edad que procrean, reconocen a sus hijos sin ninguna objeción. Esto lo corroboramos igualmente entrevistando no sólo a las encargadas de Registros, sino también algunas madres solteras menores de 18 años de edad que formalizaron este acto.

Hay que decir que se sustentan en el Dictamen No. 2 del 24 de marzo de 1987 de la propia Dirección especializada citada del Ministerio de Justicia, que aunque se refiere a la posibilidad de que los menores de 18 años puedan concurrir ante notario para realizar declaración jurada con el objeto de promover la subsanación, cambio, modificación o supresión de nombre y apellidos de ellos o los de sus hijos, lo aplican de manera extensiva a la comparecencia ante el registrador para el trámite que ocupa este análisis.

Dice este Dictamen que si el menor es casado, comparece amparado en el artículo 92.3 del Código de Familia y en el supuesto de que no esté casado, pero tiene hijos, entonces se aplica el artículo 85 inciso 5 del propio Código para que pueda representar a dichos hijos. Este último precepto como se conoce, establece entre los derechos y deberes de los padres, representar a sus hijos en todos los actos y negocios jurídicos en que tengan interés; completar su personalidad en aquellos para los que se requiera la plena capacidad de obrar y ejercitar oportuna y debidamente las acciones que en derecho correspondan a fin de defender sus intereses y bienes.

Sigue explicando después que en el caso del menor de 18 años que no esté casado y tenga hijos, no puede comparecer ante notario en actos jurídicos relacionados con su propia persona, en cuyo caso hay que cumplir también con lo establecido en el artículo 85 acápite 5 del Código de Familia.

Conocimos también de la existencia del Dictamen No. 3, también de 1987, que se refiere a la misma cuestión, pero aclara que en todos los casos, estos padres menores de edad deben comparecer conjuntamente con sus padres o representante legal, quienes deben ofrecer su consentimiento.

Es nuestra opinión que así como para casarse, los menores de edad necesitan previamente de la aprobación de sus padres u otras personas autorizadas, para reconocer a sus hijos o reclamar la filiación, deben tener también esa posibilidad, complementada, claro está, con la conformidad de quienes lo representen legalmente o del fiscal si aquellos se negaran.

La intervención del fiscal aquí estaría justificada plenamente, pues la Ley de la Fiscalía General de la República* confiere al fiscal la facultad de representar a los menores no sólo cuando carezcan de representante legal, sino también cuando los intereses de éste último sean contrapuestos a los del menor.

Considero que esta cuestión tan importante, debe precisarse en el futuro Código de Familia, debiendo predominar el principio de que el reconociente pueda serlo también un menor de edad con el requisito de autorización o consentimiento de sus padres o representantes legales.

* Artículo 25.2, Inciso A. Ley No. 83. Ley de la Fiscalía General de la República.

El Proyecto de Código de Familia de 1996 otorga a los menores de edad autorización para reconocer, previa la autorización o el consentimiento de sus representantes legales y si estos no accedieran estarán asistidos por el fiscal, lo que indica que es ésa la perspectiva de los que tienen la importante misión de redactar el nuevo Código,

3.2.2. Término para el reconocimiento.

Del estudio de la preceptiva del Código de Familia y de la Ley del Registro del Estado Civil queda claro que la acción para realizar el reconocimiento de la filiación es imprescriptible.

El reconocimiento voluntario puede realizarse inmediatamente después del nacimiento, en el propio centro asistencial de salud, ante el director de la institución o la persona que este designe, dentro de las setenta y dos horas posteriores al nacimiento o dentro de los 30 días posteriores al parto si este no tuviere lugar en un centro del sistema nacional de salud, debiendo realizarse la declaración en este caso ante el registrador del estado civil; o dentro de los noventa días siguientes a que se le cite, mediante un documento público; o en el propio acto en que se recibe el apercibimiento para concurrir ante el registrador; o después de ser el hijo mayor de edad o en cualquier tiempo durante la minoría de edad .

Si se hiciera con posterioridad a los plazos señalados, se tramita a través de un expediente de reconocimiento fuera de término.

El artículo 86 del Reglamento de la Ley del Registro del Estado Civil deja claro que el reconocimiento con posterioridad al acto de inscripción podrá efectuarse en cualquier tiempo.

Así también, cuando se precisa acudir ante el órgano jurisdiccional a reclamar el reconocimiento, bien sea el hijo mayor de edad o el padre o la madre que ya lo hubiere reconocido con respecto al que aun no lo ha hecho, o bien el progenitor que habiendo impugnado a nivel registral la paternidad o maternidad, la quiera reconocer después y se encuentre con la falta de consentimiento de quien ya la reconoció, o cuando el que lo reconoce omite u oculta los datos del otro como ya analizamos antes, puede hacerlo en cualquier tiempo, después incluso de haber fallecido el progenitor contra el que se dirige la demanda.

En resumen, lo mismo para realizar voluntariamente el reconocimiento que para pedir o reclamar al tribunal la determinación de la filiación, los facultados, que según nuestra ley son los padres conjunta o separadamente y el hijo, no tienen que sujetarse a un plazo específico, pues no funcionan aquí los términos de prescripción.

Vale destacar que en Cuba estos mecanismos legales para garantizar el reconocimiento y la inscripción de los hijos se facilita por el hecho de que casi el 100% de los

nacimientos ocurren en centros hospitalarios en los que se viabilizan esos trámites como ya hemos explicado.

Es significativo que la Ley del Registro del Estado Civil no marca un término para que la dirección del hospital remita al Registro Civil correspondiente el modelo o acta donde consta la declaración de aquel de los padres que la haya ofrecido, para que sea transcripta en el libro de nacimientos que corresponde, o lo que es lo mismo, para que se practique el asiento, pues sólo hace alusión a las 72 horas siguientes al parto dentro de las cuales se debe tomar dicha declaración. Esta falta de precisión puede originar demora en el envío y recepción del referido documento y consecuentemente dilación también en la práctica de la citación que se debe verificar al otro progenitor cuando corresponde a que hemos hecho alusión antes, todo lo cual también puede hacer más tardío el trámite de inscripción.

Efectivamente, la demora a que nos referimos es real pues hoy por hoy los centros hospitalarios de Santiago de Cuba, permanecen con los citados documentos en su poder hasta treinta días aproximadamente antes de remitirlos al Registro correspondiente y dentro de ése período el padre puede acudir al hospital a inscribir al hijo. Debe señalarse que no existe un término uniforme en todos los hospitales para esta diligencia y algunos emplean menos tiempo.

Existe una Instrucción del Director de Notarías y Registros Civiles del Ministerio de Justicia, la No. 2 del año 2001, que dispone que cuando la madre no reside en la provincia donde esté el centro hospitalario, se le entrega el modelo MJ- RC- 97- 02 que es donde se plasma la solicitud de inscripción, y se le explica que debe concurrir al Registro del Estado Civil con el modelo dentro de los treinta días.

Esta disposición que se ha hecho con el objetivo de agilizar el trámite de inscripción en el Registro Civil correspondiente, puede ocasionar sin embargo, que se demore más el asiento, o que no se efectúe si la madre no se presenta como se le ha indicado.

Considero que la remisión de esos documentos a través del Registro Civil del Municipio donde ocurre el nacimiento es una garantía que no debe rechazarse aunque en algunos casos pudiera resultar demorado.

BIBLIOGRAFÍA

1. Albadalejo García Manuel. **“Curso de Derecho Civil”**. Tomo IV. Sexta Edición. Editor José María Bosh S.A Barcelona. España 1994.
2. Alvarez Tabío Fernando. **“Comentarios a la Constitución Socialista”**. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana. 1985.
3. Arias Ramos José. **“Derecho de Familia”**. Editorial Guillermo Kraft. Buenos Aires. Argentina. 1943.
4. Benito Pérez Juan. **“Instituciones de Derecho Histórico Español”**. Volumen I. Ensayos por el propio autor. Barcelona. 1931.
5. Bocaranda Espinosa Juan José. **“La Filiación Adulterina”**. Editorial La Torre. Caracas. Venezuela. 1973.

6. Brunner Henrich. “Historia del Derecho Germánico”. Editorial Perrot. Editorial Labor S.A. Barcelona. España. 1936.
7. Boletín del Tribunal Supremo Popular de Cuba. Año 1981. Segunda Parte. Edición Ordinaria.
8. Calderón Alvaro R. “La Filiación en Puerto Rico” Editorial Colegio de abogados. San Juan. Puerto Rico. 1978.
9. Carreras Cuevas Delio. “Derecho Romano”. Editorial Pueblo y Educación. Ministerio de Educación Superior. 1980.
10. Castán Tobeñas José. “Derecho Civil Español Común y Foral”. Editorial Reus, S.A. Madrid. Tomo V. Volumen II.
11. Ciccu Antonio. “La Filiación”. Editor Revista de Derecho Privado. Madrid. 1930.
12. Código Civil Español hecho extensivo a Cuba en 1889. Angel C. Betancourt. Habana. Cuba. 1910.
13. Diccionario Enciclopédico Universal. Editorial Marín. España. 1990.
14. Díez Picazo Luis y Antonio Guillón. “Sistema de Derecho Civil”. Volumen IV. Ediciones Tecnos S.A. España. 1983.
15. Enciclopedia Jurídica Española. Tomos XVI y XVII.
16. Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana. Tomo XLII.
17. Fernández Bulté Julio. “Historia General del Estado y del Derecho en la Antigüedad”. Edición Revolucionaria. Instituto Cubano del Libro. Universidad de La Habana.
18. F. Laurent. “Principios del Derecho Civil”. Editor J. B Gutiérrez de Garte.
19. La Cruz Berdejo José Luis y otros. “Derecho de Familia”. Tercera Edición. Fascículo I.
20. Mesa Castillo Olga. “Derecho de Familia”. Facultad de Derecho. Universidad de La Habana.
21. Montés Panadés y Colectivo de Autores. “Derecho de Familia”. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia. España. 1991.
22. Peral Collado Daniel. “Derecho de Familia”. Editorial Pueblo y Educación. Ministerio de Educación. Cuba. 1980.
23. Ponencias de Derecho Civil. Conferencia Jurídica Nacional de la Organización de Bufetes Colectivos. Artículo “De las Relaciones Paterno Filiales y la Patria Potestad”. Colectivo de Autores.
24. Puig Peña Federico. “Tratado de Derecho Civil Español”. Tomo II. Volumen II. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. España. 1947.
25. Revista Cubana de Derecho No. 19. Año XI. “Comentarios al Código de Familia”. Por el Dr. Francisco Varona.
26. Valverde Calixto. “Tratado de Derecho Civil Español”. Valladolid. Cuarta edición. Tomo IV. 1938.
27. Volterra Eduardo. “Instituciones de Derecho Privado Romano”. Editorial Civitas S.A.

LEGISLACIONES CONSULTADAS

- ✓ Constitución la República de Cuba. 1940. Editorial Cultural. S.A. La Habana. 1940.
- ✓ Constitución de la República de Cuba. 1976, con las modificaciones de 1992.
- ✓ Ley 1289 del 14 de febrero de 1975. Código de Familia.
- ✓ Ley No. 51 del 15 de julio de 1985. Ley del Registro del Estado Civil.
- ✓ Ley No. 83 del 11 de julio de 1987. Ley de la Fiscalía General de la República.

II. EVENTOS



IX ENCUENTRO INTERNACIONAL CIENCIAS PENALES 2008

Del 10 al 12 de diciembre del 2008
Palacio de Convenciones de La Habana



*Instituto de Desarrollo
e Investigaciones del Derecho*



Fiscalía General de la República

Estimados colegas:

*La Fiscalía General de la República de Cuba y el Instituto de Desarrollo e Investigaciones del Derecho (IDID), se complacen en informarle que del **10 al 12 de diciembre del año 2008** se celebrará en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, el **IX Encuentro Internacional Ciencias Penales 2008**.*

Este evento, ya tradicional en el ámbito internacional por su alcance y contenido, cumple más de una década con su novena edición Ciencias Penales 2008, que reunirá a profesionales y técnicos interesados en la materia para intercambiar experiencias sobre el desarrollo de las distintas disciplinas que lo integran.

Los eventos Ciencias Penales, se han celebrado cada dos años de forma ininterrumpida a partir de 1992, con creciente participación de destacados especialistas de las más diversas latitudes, lo que unido a la actualidad de sus temáticas, han convertido a este foro, en uno de los cónclaves científicos de mayor prestigio internacional en Iberoamérica.

En virtud de lo expuesto, plácenos sobremanera extenderle muy cordialmente una cálida invitación para compartir las sesiones de este importante evento, donde será organizado un atractivo programa social, de modo que los delegados y sus acompañantes disfruten de la tradicional hospitalidad del pueblo cubano.

Quedamos en espera de conocer muy pronto acerca de su inscripción en el Encuentro, al igual que tener el privilegio de darle la bienvenida en La Habana. Mientras tanto, sírvase aceptar los más cordiales saludos que le hacemos llegar desde Cuba.

Fraternalmente,

Comité Organizador

ORGANIZADO POR:

- Fiscalía General de la República de Cuba.
- Instituto de Desarrollo e Investigaciones del Derecho (IDID).
- Palacio de Convenciones de la Habana.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES:

El evento va dirigido fundamentalmente a abogados, jueces, fiscales, médicos legistas, penitenciarios, criminólogos, victimólogos, sociólogos, psicólogos, profesores universitarios, así como a cualquier otro especialista interesado en sus temáticas.

IDIOMAS OFICIALES: Español e Inglés

PROYECCIONES TEMÁTICAS

- Sociedad, Terrorismo y Derecho Penal
 - El Derecho Penal versus terrorismo
 - Derecho Internacional y enfrentamiento al terrorismo
 - Lucha contra el terrorismo y garantías procesales
- Delito Transnacional y Globalización
 - Crimen organizado, droga y drogadicción
 - Tráfico internacional de drogas: raíces y tratamientos
 - Crimen organizado y lavado de dinero
 - Delito transnacional y la red de comunicación mundial
- Tráfico internacional de personas
- Importancia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en la Prevención y Erradicación de este Flagelo.
 - Vínculos entre la Corrupción y otras formas de delincuencia
 - Delincuencia Organizada y Corrupción
 - Cooperación internacional para prevenir y luchar contra la Corrupción
- *Derecho Penal Internacional*
 - Los conflictos internacionales en la actualidad y los crímenes de guerra.
 - La Justicia Penal Internacional. Nuevos retos para los países de menor desarrollo.
- El Derecho Penal de la Postmodernidad
- El Derecho Penal del enemigo
- El Delito Informático y su investigación
- El debido proceso

- Papel del Fiscal en el proceso penal moderno
- Principio de oportunidad y de legalidad en el ejercicio de las acciones penales
- El juicio oral en la modernización del proceso
- Contribución de la Criminalística a la justicia penal
 - Principios y práctica de la criminalística
 - Desarrollo actual de la Investigación Criminal
 - Importancia de la Investigación Dactiloscópica
 - Avances de la Odorología Forense
 - ADN y Criminalística
- Tratamiento penitenciario y la reinserción social
- La administración de justicia de menores: enfoque contemporáneo
- Papel de la medicina legal y la psiquiatría forense en el proceso penal
- Pensamiento criminológico transdisciplinario. Teoría y metodología
- Investigación Criminológica. Tendencias y realidades
- Delincuencia, desarrollo socioeconómico y control social
- Delincuencia ecológica: Caracterización
- Personalidad y conducta delictiva
- Delincuencia, género y violencia
- Delincuencia, ciclo vital y violencia
- Perspectivas y desarrollo actual de la Victimología
 - Protección de víctimas y testigos
 - Trabajo social victimológico

Los trabajos deberán ser presentados a la Comisión Técnica antes del 1º de agosto del año 2008 para que puedan ser incluidos en el Programa Científico del Encuentro.

FORMATO PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES Y TRABAJOS

Los trabajos deben ser presentados en original y copia antes del 1º de agosto del 2008, acompañados de una copia en formato digital, en disquete de 3.5 ó mediante correo electrónico, a las siguientes direcciones: relaciones@fgr.cu / idad@fgr.cu , para asegurar su reproducción en las Memorias del Evento.

Los trabajos completos tendrán como mínimo 5 cuartillas y un máximo de 15, estructurado en introducción, objetivos, material y métodos, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas.

PROGRAMA CIENTÍFICO PRELIMINAR

El Programa Científico del Congreso se desarrollará en sesiones plenarias, talleres, paneles y mesas redondas.

Se impartirán conferencias magistrales por destacados científicos sobre aspectos de mayor interés y actualidad.

Cuota de inscripción: \$230.00 CUC

Cuota de inscripción para estudiantes de pregrado: \$150.00 CUC

Los estudiantes al acreditarse deberán presentar documento acreditativo de dicha condición.

Correspondencia

Para mayores informaciones sobre el IX Encuentro de Ciencias Penales 2008 diríjase a:

Lic. Migdalia Luna Cisneros
Organizadora Profesional de Congresos
Palacio de Convenciones de la Habana, Cuba
Avenida 146 entre 11 y 13, Playa
Apartado Postal 16046, La Habana, Cuba
Teléfonos: (537)208 6176
E-mail: Migdalia@palco.cu / migdalialuna@yahoo.com
<http://www.complejopalco.com>

Lic. Miguel Angel García Alzugaray
Coordinador Comité Organizador
Fiscalía General de la República de Cuba
Amistad No.552 entre Monte y Estrella, Centro Habana
La Habana, Cuba, CP 10200
Teléfono: (537)867-0795 / (537)861-3070 Fax: (537)860-4268
E-mail: relaciones@fgr.cu / idad@fgr.cu
Sitio Web: www.fgr.cu





III. GLOSARIO DE TERMINOS Y CONCEPTOS JURÍDICOS

O

Occiso─

significa muerto violentamente, por lo que no es aplicable a una persona que muere por enfermedad o por cualquier otra causa no violenta.

Onus probandi─

se refiere a la obligación de demostrar algo con prueba suficiente. Recae normalmente sobre quien alega un hecho o reclama un derecho.

Opinión─

escrito que emite el juez al resolver un caso. Usualmente se aplica a las decisiones del Tribunal Supremo y del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Cuando se aplica al Tribunal Supremo, se distingue de "sentencia". Una opinión del Tribunal Supremo establece doctrina aplicable a cualquier otro caso de similar naturaleza. Una sentencia, sin embargo, resuelve únicamente a los efectos del caso particular. A diferencia de las opiniones, las sentencias sólo se publican si el tribunal así lo ordena. El propio Tribunal Supremo determina cuándo su determinación final en un caso constituye una opinión o una sentencia.

Opinión concurrente─

la que emite por separado un juez distinto del que escribe la opinión de mayoría, en la cual expresa estar de acuerdo con ésta. La concurrencia puede ser con el resultado o con los razonamientos de la opinión de mayoría, o con ambos. Véase "opinión de mayoría".

Opinión de mayoría o mayoritaria─

aquella en la que concurre la mayoría de los integrantes de un tribunal colegiado que intervienen en la toma de la decisión. Distíngase de la llamada "opinión de pluralidad" o "plurality opinion".



IV. NOTICIAS

Redobla fiscalía cubana enfrentamiento a los delitos

La Habana, 25 sep (PL) El fiscal general de la República de Cuba, Juan Escalona aseguró hoy que ese organismo enfrentará todo tipo de delito que empañe la recuperación del país tras el paso de los huracanes Gustav y Ike.

Durante el programa radiotelevisivo Mesa Redonda Informativa, Escalona y otros especialistas comentaron las misiones que en las actuales condiciones de la isla asumen las instituciones jurídicas.

La misión es no permitir que personas inescrupulosas y sin dignidad se apoderen ilícitamente o desvíen los recursos que el Estado destina a las familias de los territorios más azotados por los meteoros, afirmó.

Indicó el Fiscal General que se trata de evitar que trasieguen en el mercado negro los alimentos, materiales de construcción, medicamentos y otros recursos que se distribuyen y entregan a la población para la reconstrucción del país.

El programa de la televisión cubana estuvo dirigido a explicar el sistema de esa institución, la tramitación de los procesos penales, el enfrentamiento a las conductas delictivas y la protección a los derechos ciudadanos.

La Fiscalía General de la República tiene la responsabilidad del control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución.

También responde por hacer cumplir las leyes y demás disposiciones legales por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos; y la promoción y el ejercicio de la acción penal pública

Un millón de niños en prisión, denuncia ONU

Alrededor de un millón de niños vive en prisión en todo el mundo, la mayoría de los cuales son miembros de minorías y grupos desprotegidos, denunció hoy la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navanethem Pillay, en Ginebra.

Con motivo de la semana dedicada a la "Dignidad y Justicia para los Detenidos" que se celebrará del 6 al 12 de octubre, la abogada sudafricana denunció la existencia de millones de arrestos injustos o de prisioneros maltratados.

Los menores se encuentran especialmente en peligro por ser los más expuestos a los abusos. Sin embargo, cada día surgen cientos de nuevos casos, muchos de ellos en condiciones horribles.

En Europa preocupan especialmente los cada vez más largos periodos de detención de los emigrantes ilegales

Drogas: El reo evaluador

Los Estados Unidos, el mayor mercado global de la droga, persiste en no verse por dentro y en tachar o aprobar al resto del mundo en relación con el combate a semejante flagelo.

La nación cuyas autoridades han comerciado incluso armas por cocaína en Centro y Sudamérica, y utilizan hasta sus propios transportes militares en Asia Central para mercader con opio, considera que exclusivamente los demás son impuros y condenables.

Por demás, esa disparatada y manipulada evaluación anual que realiza el Departamento de Estado, con un fuerte rechazo internacional, tiene evidentes visos políticos, dirigidos precisamente a desacreditar la imagen de gobiernos no adscritos a la línea oficial norteamericana.

Precisamente en esa cuerda, hace unos días David Johnson, secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, indicó que Venezuela y Bolivia han fracasado en su enfrentamiento al tráfico de estupefacientes, y precisó que el gobierno de Evo Morales permite los cultivos ilícitos de coca.

¿Casualidad? Está claro que si Caracas y La Paz fuesen gobernados por oligarquías corruptas o regímenes militares fascistas, ligados todos a los narcóticos, la nota otorgada por Washington en materia de combate a las drogas sería cuando menos sobresaliente. ¿Pero qué esperar si se trata de manchar la imagen del líder bolivariano y del primer Presidente indígena en el Cono Sur latinoamericano?

Desde luego que la respuesta de Caracas no se hizo esperar, primero en defensa de la dignidad nacional, y segundo recordando a la Casa Blanca que se mire bien por dentro cuando hable del sucio negocio de los alucinógenos.

Mientras, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García, respondió que su gobierno ha cumplido los acuerdos internacionales en la lucha contra la droga y calificó la decisión de Washington como política.

Es, dijo con toda razón, un acto dirigido a sancionar este comportamiento respetuoso que ha tenido La Paz respecto a convenios internacionales. "No deja de ser nada más que una decisión política arbitraria, técnicamente injustificada y políticamente amañada en contra de los bolivianos", agregó.

Pero la Casa Blanca insiste todos los años en su selectivo examen, con más razón cuando le permite ahondar su agresividad contra los incómodos vecinos, y arrogarse el

pretendido derecho de suprimir acuerdos y la entrega de fondos de todo tipo a "aquellos involucrados con la droga".

Y ciertamente, si fuera a ser justo y exacto, entonces la administración Bush debería empezar por no otorgarse un solo dólar.

V. CURIOSIDADES

En la India o fuma o maneja



En la Capital de la India está prohibido fumar cuando se maneja. Indica Reuters que la medida tiene como objetivo reducir los cientos de muertos en accidentes de carretera que se registran cada año en Nueva Delhi.

La Corte Suprema de Delhi falló que aquellos a quienes se sorprenda fumando detrás del volante serán multados con 500 rupias, equivalente a unos 8,6 euros.

Según la Policía de Tráfico de Delhi, casi dos mil personas mueren cada año en más de ocho mil accidentes que ocurren en las carreteras de la ciudad.

La corte también decidió que los conductores del transporte público - incluidos autobuses estatales y taxis - deben tener un mínimo de 12 años de educación escolar, en vez de 10 años.

Las bocinas de los coches con un volumen demasiado alto o musicales también fueron prohibidas. La capital india tiene casi tres millones de vehículos